



Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

Guatemala, 12 de enero de 2006

Licenciado
Ana Isabel Antillon
Directora
Dirección Legislativa del Congreso de la República
Su Despacho

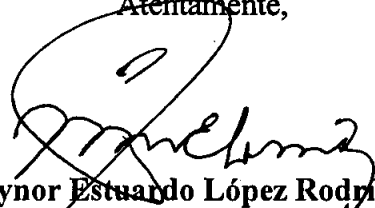
Respetable Licda Antillon:

Por este medio remito a usted el Dictamen enmarcado dentro de la iniciativa número 3169, la cual dispone aprobar reformas al Decreto Número 48-97 del Congreso de la República, Ley de Minería.

Dicha iniciativa fue estudiada, analizada y Dictaminada en el seno de la comisión de Energía y Minas, cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 43 del Decreto Número 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Ruego trasladar al Honorable Pleno para su discusión, con las formalidades que usted estime pertinentes.

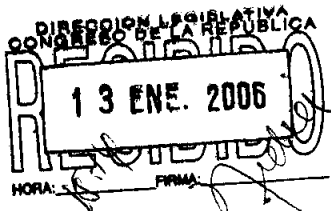
Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,


Mynor Estuardo López Rodríguez
Presidente



Adjunto Archivo en Disquette.





Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

DICTÁMEN

REFORMAS AL DECRETO 48-97
LEY DE MINERÍA

HONORABLE PLENO:

El pleno del Congreso de la República, con fecha 10 de febrero del presente año, conoció la Iniciativa de Ley identificada con el número de orden **3169**, promovida por el Diputado Otoniel Fernández Escobar, que promueve la aprobación de **REFORMAS AL DECRETO NUMERO 48-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE MINERÍA** y dispuso trasladar dicha iniciativa a la Comisión de Energía y Minas, de acuerdo a lo estipulado en los Artículos 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para su estudio y dictamen correspondiente. Siendo de suma importancia para el país, la Comisión de mérito, presenta a su consideración el **DICTAMEN** siguiente:

ANTECEDENTES.

La iniciativa referida tiene por objeto la modificación del **Decreto 48-97, Ley de Minería**, ampliando términos y abreviaturas definidos en la Ley, modificando la priorización de solicitudes y ampliación de licencias. Adiciona audiencias sectoriales separadas a grupos representativos de las comunidades, para identificar e incorporar debilidades y fortalezas en el estudio de mitigación. Norma la consulta al Consejo Nacional de Áreas Protegidas y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cuando se presente un Estudio de Impacto Ambiental que estuviere comprendida dentro de los límites de un área protegida. Se obliga al titular de una licencia de exploración a regenerar reponer, restituir y/o sanear los recursos naturales afectados directa o indirectamente por la explotación y al pago de regalías, impuestos y cánones para asegurar la generación de empleos y actividades productivas de las poblaciones participantes en la explotación. Se modifica el otorgamiento de licencias de explotación, así como la determinación del área de explotación, la ampliación de los minerales a extraer y las obligaciones del titular de la licencia de explotación. Se amplía el tratamiento de resarcimiento por daños causados a derechos de propiedad, salud, ambientales, etc., para destinarlos a la corrección de daños sociales, ecológicos y productivos en las áreas cuya licencia originó el cobro y se establecen los valores provenientes de multas cuya afección es debida a alteraciones en la responsabilidad civil y penal para destinarse al resarcimiento. Se modifica y amplía el Artículo correspondiente a las regalías, estableciéndolo en 25% para el Estado, de cuyo porcentaje se asigna un 5%



Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

para destinarse tanto al departamento como al o los municipios donde estuviere la explotación. Se adicionan dos capítulos con sus respectivos artículos para tratar los asuntos relacionados con el medioambiente, normando el resarcimiento por deterioros medioambientales provocados directa o indirectamente por la actividad minera. Se prohíbe la explotación a cielo abierto.

ANÁLISIS TÉCNICO Y JURÍDICO.

La iniciativa de Ley hace la consideración acerca de que la legislación actual estimula la extracción de nuestros recursos naturales pero descuida fundamentalmente los aspectos de retribución de utilidades a la patria y los aspectos más trascendentes de lo social y ambiental.

Se expone que el concesionamiento de los derechos mineros se ha realizado a favor de intereses extranjeros, siendo que la ley vigente no establece distinción entre nacionales o extranjeros, siendo lo real que cualquier persona, individual o jurídica, puede optar al derecho de licenciamiento minero, obligándose el total cumplimiento de los requisitos de ley para su obtención.

Es prudente ver a la actividad minera como un sector que puede coadyuvar a la economía a través del ingreso de capital, ya sea nacional o extranjero, así como el efecto multiplicador que toda actividad comercial o industrial genera.

Se tiene la percepción de que el único ingreso que se recibe de la actividad minera es en concepto de regalías, lo cual en realidad es complementado por los distintos impuestos que ingresan tanto al Estado como a las Municipalidades, requiriéndose que a esta actividad, como a cualquier otra, les sean aplicados los controles fiscales legales para garantizar los beneficios al país.

Compartimos la opinión del autor de la iniciativa respecto de que se deben buscar los mecanismos idóneos para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades ambientales que se generan durante y después de la vida de un proyecto minero, reforzando los controles y monitoreos, tanto de los procesos como de los resultados de los mismos.

Dentro de la redacción del articulado podemos analizar:
el Artículo 1 que reforma el artículo 6, ampliando la literal a), debe considerarse adicionar también otros términos tales como: Reconocimiento y Exploración. En relación a los demás términos consideramos que deben ser objeto de un análisis técnico y jurídico más profundo, con el fin de que al establecer los mismos no se cometan incongruencias técnicas o legales.



Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

Con respecto a lo propuesto en el Artículo 2 que reforma el artículo 12 de la actual ley consideramos que se está violando el principio jurídico concerniente al derecho de inscripción primaria (primero en registro es primero en derecho). Seguidamente la creación de un equipo de revisión y selección con poder discrecional propiciaría situaciones que son las que se ha tratado de prevenir, al eliminar cualquier tipo de discrecionalidad del funcionario o empleado público.

Los Artículos 3 y 4 que modifican los Artículos 14 y 15 incluyen reformas y ampliaciones que podrían ser de beneficio para el desarrollo de la actividad minera pero no se norma la modificación reglamentaria necesaria para hacerlos efectivos.

En relación al artículo 5 que reforma el artículo 19 de la ley vigente habrá que establecer diferencia entre un dictamen técnico y la consulta con las comunidades, ya que el contenido de dicho artículo se refiere a dos cosas distintas, razón por la cual el procedimiento de consulta debería de ser de naturaleza reglamentaria. Disentimos en la reforma de este artículo con la eliminación del plazo ya que lo procedente es dejar establecido el plazo perentorio para resolver el estudio en cuestión como se contempla en la legislación actual.

Referente al artículo 6 que reforma el artículo 20 consideramos adecuada la inserción del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ambiente y, más aún, en lo concerniente a las áreas protegidas consideramos que se debe ir más adelante, reformando el mismo en el sentido de prohibir cualquiera de las actividades objeto de regulación de la ley de minería en toda extensión de tierra ya definida como área protegida.

Del análisis del artículo 7 que reforma el artículo 26 de la ley vigente logramos determinar que el impacto causado en la etapa de exploración es mínimo y, adicionalmente, este tema ya está contemplado en el Estudio de Mitigación de los proyectos mineros. En cuanto al inciso f) se consigna que deberá regenerar reponer, restituir y/o sanear los recursos naturales afectados directa o indirectamente por la explotación, siendo que la licencia de que trata es de exploración. En cuanto al inciso g) mencionado en la iniciativa, en la etapa de la exploración no se genera ninguna utilidad para el inversionista, sino por el contrario, representa una serie de desembolsos, la mayoría de veces sin retorno, por lo que es improcedente imponer cargas adicionales y mucho menos regalías, ya que las mismas se calculan en base a los ingresos percibidos, que en este caso son nulos. Adicionalmente se consigna en este inciso que los aportes monetarios serían para asegurar la generación de empleos y actividades productivas de las poblaciones participantes en la explotación, tratándose en este inciso sobre la licencia para la actividad de exploración y tomando además en cuenta que no todas las licencias de exploración se convertirán en licencias de explotación.



Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C. A.

En el artículo 8 que modifica y amplía el artículo 28 se aprecia una posible usurpación de funciones en el sentido de que el órgano judicial, por su naturaleza, es eminentemente administrador de justicia, siendo el Ministerio de Energía y Minas, en todo caso, el órgano administrativo responsable de la vigilancia mencionada. Dejar la determinación del plazo de la licencia a discreción de una comisión de evaluación es contraproducente y genera incertidumbre en cualquier persona interesada en realizar actividad minera, contrario a lo establecido en la legislación actual.

Se considera que el artículo 9 que modifica al artículo 29 representa un aspecto técnico susceptible de ser reglamentado y no necesariamente normado en ley.

De la revisión del artículo 10 que modifica y amplía el artículo 30 se considera procedente mantener la redacción del artículo actual vigente por ser esta clara, sencilla y concisa.

Apoyamos la modificación al inciso a) del artículo 31 de la ley vigente que propone el artículo 11 de la iniciativa. En cuanto al inciso e), los daños y perjuicios están regulados por el Código Civil vigente, que determina la forma en que se realizan los reclamos por daños a terceras personas.

Al revisar el artículo 12 que modifica y amplía el artículo 33 se considera adecuado conservar la redacción vigente por ser esta sencilla y clara.

El artículo 13 que reforma el artículo 60 en lo referente a la modificación propuesta, esta debe ser contemplada y adecuada en la sección en donde se establezcan las garantías tales como fianzas, hipotecas, depósitos en efectivo, etc. por incumplimiento o daños que se puedan generar durante o después de la ejecución de las operaciones.

Con respecto al artículo 60 bis, los temas allí tratados ya se encuentran regulados por las leyes correspondientes al tema, incluyendo la omisión de denuncia por parte de funcionarios públicos y el delito ambiental.

La modificación y ampliación del Artículo 63 de la Ley promovida por el artículo 14 de la Iniciativa en relación a la implementación de la factura para acreditar los precios de venta en el mercado internacional, consideramos que es adecuada, siempre y cuando sea adicional a la declaración jurada contemplada en el artículo 62 de la ley actual, ello por la diferencia en las responsabilidades legales entre ambas, ya que es necesario que los controles se refuercen y no que se relajen. Adicionalmente consideramos que el pago de las regalías no debe ser en forma anual como se establece en la ley vigente ni trimestral como



Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

se propone en la iniciativa sino en forma mensual, esto por razones tales como el flujo de efectivo que proveería a las Municipalidades, los beneficios inmediatos que podrían percibir y disfrutar los habitantes, los intereses que podrían estar percibiendo estas Municipalidades en lugar de que los aprovechen las compañías mineras o bien las pérdidas de regalías que podrían tenerse en el caso de la quiebra de una de estas empresas, correspondiendo este tema al artículo 64 de la ley vigente.

Desde un punto de vista exclusivamente económico, el incremento de 2,400% propuesto se encuentra totalmente alejado de la realidad de los porcentajes de regalías que se pagan en los distintos países, lo cual significa que al aprobar una reforma como la propuesta se estaría prohibiendo, de hecho, cualquier intento de actividad minera, afectando con ello los ingresos que por concepto de los distintos impuestos que deben pagar las empresas relacionadas a esta actividad generan, así como los empleos directos e indirectos que se originan como consecuencia de dichas operaciones, contraviniendo en última instancia lo consignado en el Artículo 125 de la Constitución de la República donde se declara de utilidad y necesidad públicas la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. Adicionalmente consideramos que la propuesta de la distribución de la regalía es desproporcionada e injusta, siendo el más beneficiado el Estado y no la población directamente atañida por el proyecto minero, que sería lo esperado por la naturaleza de estos proyectos.

No se consigna un artículo 15 en la Iniciativa.

Del análisis del Artículo 16 que adiciona dos nuevos capítulos podemos hacer notar:
Artículo 89: Lo que propone este artículo son requisitos ya establecidos en los artículos 19, 20, 23 literal "d", 26 literal "d" y 31 incisos "a" y "e" de la ley minera actualmente vigente.

Artículo 90: Identificamos en este artículo una cláusula de naturaleza impositiva que podría considerarse como doble tributación y por lo tanto susceptible de una acción de inconstitucionalidad.

Artículo 91: El contenido de este artículo propone reformas en ámbitos ya regulados en otras leyes y la imposición de las mismas se podría considerar como una usurpación a la competencia de otras leyes, tales como la propia Constitución Política, ley de Contrataciones del Estado, ley de Probidad, Código Penal y ley de Responsabilidades.

Artículo 92: La decisión del proceso minero que se deba adoptar en determinado proyecto depende, principalmente, de decisiones eminentemente técnicas y de las características y geografía del área, así como de la localización del material a explotar, adicional a que al prohibir la minería a cielo abierto, se veda no solo la extracción de metales sino también los



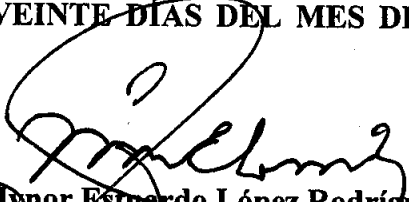
Comisión de Energía y Minas
Congreso de la República de Guatemala, C.A.

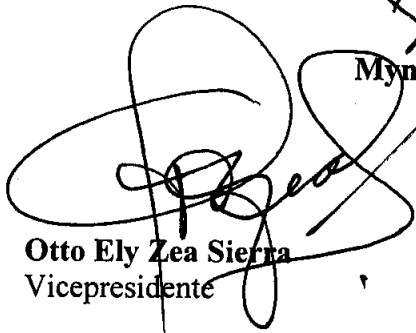
materiales de construcción, los cuales son base de la economía y del desarrollo de nuestro país. Adicionalmente la ley no debe otorgar privilegios de ningún tipo.

CONCLUSIONES:

1. Por lo anteriormente expuesto, se considera que es improcedente que se someta a discusión por parte del Congreso de la República la aprobación de la iniciativa de las **REFORMAS AL DECRETO NUMERO 48-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE MINERÍA**, promovida por el Diputado Otoniel Fernández Escobar
2. En consecuencia la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, **DICTAMINA NEGATIVAMENTE**, sobre dicha iniciativa de ley, por lo que deberá de ser enviada al Archivo de este organismo de conformidad con el Artículo 44 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE ENERGIA Y MINAS DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO.


Mynor Estuardo López Rodríguez
Presidente de Comisión


Otto Ely Zea Sierra
Vicepresidente


Marvin Haroldo García Buenafé
Secretario


Eduardo Zachrisson-Castillo


Noe Alberto Orellana Callejas

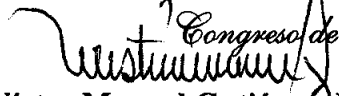

Luis Alberto Contreras Colindres


Carlos Waldemar Barillas H



Comisión de Energía y Minas

1º Congreso de la República de Guatemala, C.A.


Víctor Manuel Gutiérrez Longo

Lester Abigahil Reyna Girón

Carlos Humberto Morales Morales


Obdulio Abigahil Oqueli de León

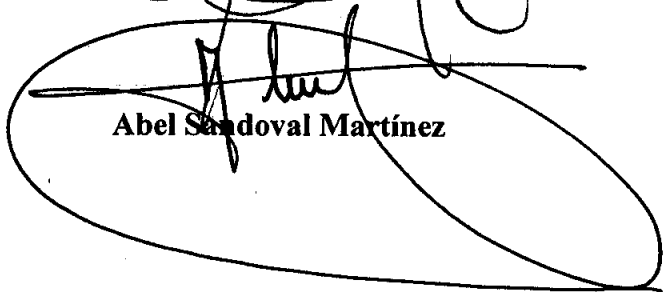

Job Ramiro García García


Ewald Mauricio Scheel Aguilar


Rubén Darío Morales Véliz


Angel Noé Lemus Juárez

Mario René Chávez García


Abel Sandoval Martínez